

PORTAL DE TRANSPARENCIA
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Nº EXPEDIENTE: 001-071660
FECHA DE LA SOLICITUD: 18 de agosto de 2022
NOMBRE: [REDACTED]
NIF: [REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]

Con fecha 18 de agosto de 2022 tuvo entrada en el Portal de Transparencia solicitud de acceso a información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada [REDACTED] solicitud que quedó registrada con el número 001-071660 y asignada al Instituto de Crédito Oficial el 1 de septiembre, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 para su resolución, y cuyo contenido literal es el siguiente:

Asunto

Informes comprobaciones ex post créditos ICO

Solicitud de información

La siguiente información la solicito con arreglo a la ley 19/2013. Además, soy periodista [REDACTED] y considero que esta información es de interés general. En 2021 el Instituto de Crédito Oficial (ICO) contrató a la consultora PwC para que realizase el control y seguimiento de las recuperaciones y cobranza de los créditos con aval público concedidos a empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

En los pliegos de esta contratación pública se establecía que la empresa contratada tenía que entregar una serie de informes trimestrales donde se verificaban las operaciones ICO y se señalaba en cuáles había impagos, además de indicar las cantidades monetarias que correspondían a esos créditos ICO con impagos, más la cantidad avalada por el Estado.

Solicito todos estos informes trimestrales que se han elaborado desde que se aprobó la contratación de la empresa PwC hasta la actualidad.

Respuesta

Mediante la presente Resolución se informa lo siguiente:

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una Entidad Pública Empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, con naturaleza jurídica de Entidad de Crédito y consideración de Agencia Financiera del Estado.

Como entidad de crédito, el ICO opera en condiciones de mercado ofreciendo financiación a empresas de todos los sectores y tamaños, sin conceder ayudas públicas ni subvenciones, y está sujeto a normativa de supervisión y control del Banco de España, bajo el principio de equilibrio y suficiencia financiera. Y como tal, está sujeto a las exigencias, requisitos y obligaciones aplicables en términos idénticos al resto de Entidades del sector financiero y bancario español



En su labor como agente financiero del Estado, el ICO gestiona por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las Líneas de Avals COVID a través de las entidades financieras.

Las Líneas de Avals COVID-19 están reguladas en el **Real Decreto-ley 8/2020 y Real Decreto-ley 25/2020** y las condiciones desarrolladas en los Acuerdos de Consejo de Ministros. La normativa de referencia adoptada por la Comisión Europea establece las condiciones de elegibilidad, la finalidad de la financiación para hacer frente a las consecuencias económicas del COVID-19, así como los límites y requisitos para avalar la financiación en función del régimen aplicable: Régimen de Ayuda de minimis Reglamento (UE) n°1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 y Comunicación de la Comisión del 20 de marzo de 2020 sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. 2020/C911/01 [C/2020/1863] junto a sus modificaciones posteriores.

Estos programas, de acuerdo a lo establecido en el citado Marco Temporal y sus sucesivas modificaciones, han estado vigentes hasta de junio de 2022. Desde su puesta en marcha, las Línea de Avals COVID-19 han desplegado avales por importe de 107.187 millones de euros que han permitido movilizar 140.627 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.192.484 operaciones (datos al cierre de la línea a 30 de junio de 2022).

Hay que destacar sobre las operaciones avaladas que:

- Se trata en todo caso, de operaciones de financiación otorgadas a autónomos y empresas por las entidades financieras que hayan suscrito con el ICO los correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avals.
- La entidad financiera es - y no el ICO - la que decide sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente elegible de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

El ICO publica la información sobre los avales respetando los límites legales que le son impuestos como entidad crediticia. La información sobre las operaciones avaladas al amparo del Real Decreto-ley 8/2020 y del Real Decreto-ley 25/2020 es objeto de publicidad activa en la **Base de Datos Nacional de Subvenciones**, detallando fecha de concesión, importe, instrumento e importe de ayuda equivalente por beneficiario. Estos datos se publican de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la LTAIBG sobre obligaciones de publicidad activa, de acuerdo a los requisitos de publicidad de información establecidos en el Real Decreto 130/2019 que tiene por objeto regular la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y de acuerdo a la normativa europea en materia de ayudas de Estado y ayudas de minimis.

Respecto a la solicitud de acceso a los informes realizados por la empresa adjudicataria del concurso público con número de expediente ICO-26-2021, planteada a través del Portal de Transparencia, hay que tener en cuenta otros intereses y derechos protegidos, que podrían ser vulnerados en caso de acceso por terceros a la información solicitada, y que la Ley 19/2013 configura como límites al derecho de acceso, en su artículo 14. En este sentido, debe señalarse que los datos bancarios están sujetos al deber de confidencialidad, que emana del secreto bancario, institución jurídica de validez plenamente admitida en nuestro ordenamiento tanto por la doctrina científica como jurisprudencial.

Respecto a los datos bancarios, la **Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito** establece en su artículo 83 el deber de reserva de información, disponiendo en el mismo que las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación. Añadiendo la misma disposición que el incumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo será considerado infracción grave y se sancionará en los términos y con arreglo a lo previsto en el Título IV de la citada norma.

La solicitud de acceso referida no se encuentra entre los supuestos exceptuados expresamente del deber de reserva de la información que, por estar expresamente recogidos en los puntos 2 y 3 del artículo 83 de la Ley 10/2014, deben ser interpretados restrictivamente.

Facilitar los informes solicitados vulneraría el deber de guardar reserva exigible al ICO en relación con las entidades financieras concedentes y de éstas con sus clientes.

Los datos que contienen los informes realizados por la empresa adjudicataria del concurso con número de expediente ICO-26-2021 son facilitados por las entidades financieras al ICO y por su naturaleza estarían sujetos a los casos del **límite de derecho al acceso contemplados en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia**, letra k) sobre garantía de confidencialidad.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente. Todo ello sin perjuicio de los Tribunales de Justicia para interpretar las leyes y aplicarlas.